Artículo Original

Recibido para publicación Mayo 19 de 2014
Aceptado para publicación octubre 30 de 2014

TÍTULO: RUPTURA DE LA UNIDAD FAMILIAR

Autores: Oscar Antonio Molina Osorio¹

Correspondencia: oscary8@hotmail.com

RESUMEN

La finalidad de este artículo es la informar al lector de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional para fallar en defensa del interés superior del menor. En Colombia es frecuente la violación por parte del INPEC hacia los traslados de los internos e internas amparados por la norma establecida en el Artículo 73 de la Ley 65 de 1993, la Resolución 2176 del 10 de julio de 2000 y la Circular 16 de 1996, cuando se trata de los derechos fundamentales de la Unidad Familiar de los menores con padres privados de la libertad. Los derechos de petición que al respecto se han presentado ante las direcciones de los establecimientos carcelarios invocados por internos y familiares hasta el momento encuentran una respuesta negativa en cuanto al trámite.

Palabras Clave

Revisar, Directrices, Afectación, Pacto, Tratados, Sujeción

ABSTRACT

The purpose of this article is it to inform the reader of the decisions thought by the Constitutional Court to fail in defense of the top interest of the minor. In Colombia the violation is frequent on the part of the INPEC towards the movements of the boarders and you hospitalize protected by the norm established in the Article 73 of the Law 65 of 1993, the Resolution 2176 of July 10, 2000 and the Circular letter 16 of 1996, when it is a question of the fundamental rights of the Familiar Unit of the minors with parents deprived of the freedom. The rights of request that in the matter they have presented before the directions of the prison establishments invoked by boarders and relatives up to the moment find a negative response as for the step.

Keywords

To check, Directives, Affectation, Agreement, Agreements, Subordination

INTRODUCCIÓN

¹ Abogado. Redactor de la crónica judicial del Diario La Libertad Barranquilla Colombia

En Colombia es preocupante ver como a las personas privadas de la libertad, se les vulneran los derechos fundamentales por encima de los pronunciamientos de La Corte Constitucional que ha expresado de manera reiterada, que:

Si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos quedan suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y no solo deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas encargadas de los presos (Colombia. Corte Constitucional, 2009).

También esto tiene cobertura para los familiares de los reclusos, pero con las decisiones arbitrarias del Centro Carcelario inducen a la ruptura de la unidad familiar de los menores cuyos padres se encuentran privados de la libertad, negándoles así el derecho constitucional de crecer junto a una familia. (Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 2003).

Ante esta situación en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha dicho que: “la familia se considera una comunidad de vida y convivencia plena” (Sentencia T-002/14), por lo que consideran los Magistrados que si el aislamiento de uno de sus miembros, como infractor de la ley penal, “cuyo comportamiento ilegal lo lleve a la perdida de la libertad” (Sentencia T-002/14); este comportamiento no debe afectar de manera inminente la estabilidad de su núcleo familiar.

Pero a pesar de los preceptos que manifiesta la Alta Corporación, el INPEC, de manera reiterativa y arbitraria, como bien lo han dicho los Magistrados, siguen vulnerando el derecho a la unidad familiar, que es una de las garantías que

resulta limitada con ocasión de los traslados de los internos y de las internas de establecimientos carcelarios lejos de su núcleo familiar; son estas las condiciones especiales que deben ser analizadas por este ente del Estado, antes de dar respuestas a dichas solicitudes, por un lado; y por otro lado a la de los familiares de los reclusos y reclusas a quienes también vulneran este derecho, ocultándoles a los menores la situación jurídica de sus padres y negándoles la visita familiar bajo el imaginario de daño psicológico y traumático a los menores.

El caso concreto del cual se ocupa este estudio es la vulneración de los derechos del niño, niñas y adolescentes a tener una familia y a crecer junto a ellos, aunque los padres se encuentren privados de la libertad; precisamente la vulneración consiste en la negativa para conceder los traslados de los internos e internas con niños, niñas y adolescentes a sedes carcelarias cerca de su núcleo familiar, toda vez, que muchas de estas personas no poseen los recursos necesarios para trasladarse a estos reclusorios y visitar a sus padres.

Es bien conocido por la jurisprudencia que el INPEC es facultativo para tomar estas decisiones, por lo que la Corte expresó el siguiente concepto en la Sentencia T-566-2007 que dice:

La limitación debe hacerse acorde con los lineamientos del tratamiento penitenciario, en donde se debe ofrecer a los reclusos la posibilidad de una vez cumplida la pena, reincorporarse a la comunidad de la manera menos traumática posible. Es así como se debe propender por una adecuada resocialización de los internos, donde sin lugar a dudas juega un papel preponderante la familia de los mismos, pues dicho vínculo filial representa la mayoría de las veces su contacto con el mundo más allá del establecimiento donde se encuentran reclusos, más si se tiene en cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo retomará su vida por fuera del penal. (2007)

Es de indicar que los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte procedente, que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existe hijos menores de edad, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el propósito de preservar la unidad familiar y de esta manera alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes, excepto que represente un riesgo inminente para los menores por parte de sus progenitores, se abstendrá la medida.

De todas formas en el Estado Social de Derecho al cual pertenece Colombia, los derechos de los niños, las niñas y adolescentes están salvaguardados por la Constitución Política en el Artículo 42 (2001) y prevalecen sobre cualquier norma, inclusive sobre los requisitos que tiene el reglamento interno del INPEC, como por ejemplo negar las solicitudes de traslados aduciendo falta de tiempo en la pena a cumplir para que se dé el traslado, sin analizar si en los hechos fácticos que rodean esta petición hay violación al derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes y en especial el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, antes de responder de fondo tales peticiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

El proceso metodológico que se implementó en la búsqueda de la información fue el análisis del material como las sentencias relacionadas con el tema de los derechos fundamentales de los niños, ruptura de la unidad familiar, cuando sus padres se encuentran privados de la libertad y son trasladados a centros penitenciarios lejos de su núcleo familiar, impidiendo con esta medida la frecuente interrelación con sus progenitores, elemento esencial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a crecer junto a ella.

La consulta a diversas sentencias permitió ampliar el panorama jurisprudencial (telaraña) y organizar de manera sistémica las decisiones de la Corte, tal cual como lo permitió el análisis efectuado en la ingeniería de reversa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESUMEN DE LAS SENTENCIAS DE LINEA JURISPRUDENCIAL SENTENCIA ARQUIMEDICA T-002-2014.

Expediente 1000856 **Fecha sentencia** 2005-03-17 **Sentencia** T-274/05
Ponente HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado JUAN BUANEGRS TIMANA MELÉNDEZ VS. CARCEL DE ACACIAS

Derecho a la igualdad a la unidad familiar y a la salud de interno que fuera trasladado de la Cárcel de Neiva y que ha solicitado su traslado a las ciudades de Neiva, Florencia o Pasto por quebrantos de salud pero las autoridades penitenciarias se lo han negado. Solicita se ordene su traslado. Derecho a la unidad familiar y personas privadas de la libertad. Relaciones especiales de sujeción. Derecho a la salud de las personas reclusas en un centro penitenciario. Las personas que se encuentran privadas de la libertad son plenamente titulares del derecho a la salud. El derecho a la unidad familiar no ha sido desconocido por la entidad demandada y ésta está ofreciendo atención médica adecuada al paciente. NEGADA.

Expediente 1574173 **Fecha sentencia** 2007-07-13 **Sentencia** T-537/07
Ponente NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado LIBIA ESPERANZA PARRA TORRES EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS

Derecho a la familia de interno recluso en el centro penitenciario en San Andrés Islas por quien su familia presento solicitud de acercamiento familiar y por ende su traslado a la cárcel de Picalaña en Ibagué sin que las autoridades del centro penitenciario se hayan pronunciado al respecto. Solicitan se ordene dar respuesta a su solicitud. Restricción de derechos a personas privadas de la libertad. El derecho fundamental de petición en cuanto a personas privadas de la libertad. Rasgos característicos del derecho de petición. El derecho a la unidad familiar de los reclusos. Facultad discrecional del INPEC para trasladar internos. Intervención del juez constitucional. La decisión de traslado es de carácter discrecional y la corte no puede invadir esa órbita funcional por lo que La Corte ordenará se estudie nuevamente la petición de traslado respondiendo de manera completa y oportuna y con base en los lineamientos que sobre el particular señalan las directrices constitucionales y del Código penitenciario y carcelario. Concedida

Expediente 1649287 **Fecha sentencia** 2007-10-25 **Sentencia** T-894/07
Ponente CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Demandante / Demandado BLANCA ROSA ALEGRIA LOPEZ VS. DIRECCION GENERAL DEL INPEC Y OTRA.

Derecho a la familia, los niños y conexos de mujer reclusa en la Cárcel de Mujeres de Cali que ha formulado derechos de petición para que le permitan las visitas conyugales con su compañero recluso en la Penitenciaría de Palmira y que a través de tutela logro que le concedieran su traslado periódico al establecimiento en que se encuentra su compañero. Informa que como represalias del establecimiento fue trasladada a la Cárcel de Valledupar situación que tacha de injusta porque adicionalmente la alejaron de su familia y su compañero. Solicita se ordene su traslado nuevamente a la Cárcel de Mujeres de Cali. La directora de la reclusión de mujeres de Cali precisa que el traslado de la interna obedeció a su situación jurídica y la calidad de los delitos cometidos por lo que se determinó que se requería de mayor seguridad siendo necesario su traslado al establecimiento

penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar. Derecho de los menores a tener una familia y a no ser separados de él, garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad. Derechos de los reclusos que se suspenden se restringen y que se mantienen intactos. Facultad discrecional del INPEC para los traslados de los reclusos. Visitas conyugales o intimas en establecimientos carcelarios. En el presente caso la medida de traslado ejecutada se encuentra ajustada a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Negligencia judicial por parte del Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali al desconocer lo señalado por el Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 que ordena la remisión del expediente a La Corte Constitucional para su eventual revisión tardándose mas de un año para el efecto. Negada. Se ordena al director del establecimiento penitenciario de Valledupar informe, oriente y preste la ayuda a la accionante sobre el procedimiento a seguir para obtener el beneficio de la visita conyugal. Se compulsan copias a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de Cali para las investigaciones correspondientes.

Expediente T-2080233 **Fecha sentencia** 2009-07-12 **Sentencia** T-435/09
Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado MARTA OLIVA GÓMEZ Y OTRO VS. INPEC

Derecho a la unidad familiar, a tener una familia y a no ser separado de ella. En la acción se solicita el traslado de un interno que se encontraba en la Cárcel de Itagüí y que por razones de seguridad fue trasladado por decisión del INPEC a la Cárcel de Girón en Santander, traslado que afectó a su menor hija, causándole graves problemas emocionales; La Sala entra a determinar si se desconocen los derechos fundamentales de un menor cuando las autoridades carcelarias han ordenado el traslado de su progenitor a un establecimiento carcelario alejado de su lugar de habitación, además si en este caso la orden de traslado se encuentra dentro del ámbito de ejercicio discrecional del INPEC.

Para esta Corporación la facultad discrecional del INPEC no es absoluta; la

decisión tomada ha agravado los riesgos para la seguridad del recluso y la situación emocional de su hija se ha visto gravemente comprometida debido a dicha decisión, por estas razones se decide conceder la tutela de los derechos invocados.

Expediente T-2296067 **Fecha sentencia** 2009-11-24 **Sentencia** T-844/09

Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Demandante / Demandado WILSON DUQUE CUÉLLAR VS. CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA DE ARMENIA

Derechos de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella. El accionante interpuso la acción en representación de un menor cuya madre se encuentra reclusa en la ciudad de Armenia, solicita sea trasladada a la ciudad de Cali en donde se encuentra al cuidado de personas ajenas a él, ya que su padre reside en un país extranjero y no tiene ningún tipo de vínculo con el menor. La Corte entra a estudiar: si la tutela procede a través de apoderado en representación del menor, teniendo en cuenta que el padre se encuentra en el exterior y la madre está reclusa en un establecimiento carcelario, la protección de los derechos fundamentales de los niños, en especial la garantía a tener una familia y a no ser separados de ella, el alcance de la restricción de la unidad familiar en los casos de reclusos, la naturaleza y los límites de la facultad de trasladar presos, en cabeza de las autoridades carcelarias desarrollada por la jurisprudencia constitucional. La Sala en primer lugar aclara que el apoderado esta legitimado para actuar ya que el menor se encuentra desprotegido debido a que su padre y su madre no se pueden hacer cargo de él, se concluye que pese a la facultad discrecional del INPEC, se debe atender el interés superior del menor, en relación con sus derechos fundamentales por lo tanto se ordena el traslado de la madre del menor a un establecimiento penitenciario de la ciudad de Cali, para que él pueda estar en mayor contacto con su progenitora. Concedida.

Expediente T-3500310 **Fecha sentencia** 2013-05-08 **Sentencia** T-266/13

Ponente JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

Demandante / Demandado JUAN CARLOS OLIVEROS Y OTROS VS. INPEC Y OTRO

Vida digna, salud, comunicación, dignidad humana, trabajo, educación, recreación, alimentación, buen trato. En este asunto más de cien reclusos promueven la acción de tutela en contra del Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias del municipio de Florencia (Caquetá) y el INPEC, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales en virtud de que fueron trasladados del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) al de Florencia, sin que éste último tuviera u ofreciera las condiciones adecuadas para las personas privadas de la libertad. Las reclamaciones son específicas y se relacionan, entre otras cosas, con deficiencias en el servicio de salud, en la alimentación, en el disfrute de las visitas conyugales o íntimas, en el servicio de telefonía, en la utilización de los servicios sanitarios, en los mecanismos de reducción de penas y en los espacios para la recreación y el deporte. Se analiza la siguiente temática: 1º. La relación de especial sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención intramuros y, el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales. 2º. El tratamiento penitenciario. 3º. La dignidad humana. 4º. El derecho a la salud. 5º. El derecho a una alimentación adecuada en calidad y cantidad. 6º. El derecho de petición. 7º. El derecho al trabajo. 8º. El derecho a la comunicación. 9º. El derecho a las visitas. 10º. El derecho a la recreación y 11º. El derecho a la educación. Se CONCEDE el amparo constitucional deprecado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

Expediente 1164057 **Fecha sentencia** 2005-12-06 **Sentencia** T-1275/05

Ponente HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Demandante / Demandado ANA BEATRIZ SILVA VS. INPEC.

Derecho de los niños y la protección a la familia y derecho a restaurar y consolidar lazos familiares de interno recluido en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Girón condenado por homicidio agravado y a quien pese a las peticiones formuladas para su traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva para que pueda ser visitado por sus tres hijos no ha obtenido respuesta al respecto. Solicita se ordene el traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva para que pueda ser visitado por sus hijos quienes se encuentran bajo el cuidado de la abuela por haber sido abandonados por la madre. Los derechos fundamentales de los niños gozan de una especial protección tanto en el orden jurídico interno como en el ámbito internacional. La garantía que el orden jurídico constitucional les otorga a los niños es extensa. Se encuentra plasmada en distintos preceptos constitucionales y en especial en el Artículo 44 superior. La protección que le otorga el orden constitucional a la familia (Artículo 42 superior) se proyecta de manera especial en casos específicos como el de los niños y el de los reclusos. El amparo a la familia derivado de lo dispuesto en el Artículo 42 superior se proyecta de modo especial sobre la situación de los reclusos. Los derechos fundamentales de los reclusos. La resocialización como meta principal de la política carcelaria. La lejanía en que se encuentran de su padre y la carencia de recursos económicos para poder ir a visitarlo impide que puedan restablecer unos lazos familiares seriamente debilitados. Concedida.

Del anterior análisis surge la siguiente pregunta: Prevalece La Corte en su decisión de amparar el derecho a la unidad familiar de los niños y niñas menores de edad con padres privados de la libertad? La respuesta ha sido establecida en las distintas Sentencias que a continuación se relacionan.

SI	NO
T-408-1995	
T-274-2005	
T-1275-2005	
T-537-2007	

T-894-2007	
T-435-2009	
T-844-2009	
T-266-2013	
T-002-2014	

El traslado de un(a) interno(a) causa traumas al interior de la Unidad familiar, sobre todo cuando el INPEC no tiene en cuenta los derechos fundamentales de la unidad familiar y no examina si existen menores de edad al interior de la misma, precisamente para no vulnerar sus derechos.

Aun así, las decisiones del INPEC, no son arbitrarias pues las mismas se encuentran amparadas en la Resolución 2176 de julio 10 de 2000, que agudizó más la norma establecida en el Artículo 73 de la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario que dice: “para que proceda el traslado del interno debe pasar un año en la penitenciaría” (1993) agravando así las consecuencias del traslado al sitio donde tiene su núcleo familiar. Precisamente es allí donde radica la violación de los derechos de los menores, pese a la insistencia de la Corte Constitucional, el INPEC, se mantiene en sus decisiones de negar los traslados de los internos a centros carcelarios ubicados cerca al núcleo familiar. Es necesario hacer una revisión al articulado que soporta a la norma para que estos derechos no se sigan vulnerando por parte de este organismo y los menores de edad puedan crecer junto a sus padres, aunque estos sean infractores de la ley.

CONCLUSIONES

Se puede concluir con respecto a esta línea jurisprudencial a la cual ha sido volcado el análisis con los diferentes conceptos de la Corte Constitucional que se debe salvaguardar el derecho fundamental de la

Unidad Familiar de los menores de edad, cuyos padres se encuentren privados de la libertad; que así como en muchas ocasiones este ha sido vulnerado por el Estado, también es vulnerado por los mismo familiares de los menores, que con su proceder creen estar previniendo un daño psicológico a los mismos.

A ello se hace referencia de la siguiente manera: El ser humano por su misma condición no está exento de cometer errores que más tarde lo llevaran a consecuencias irreversibles como por ejemplo transgredir el ordenamiento jurídico que conlleva a la pérdida de la libertad, condición esta que no es más que la disminución de sus derechos, mas no la suspensión, ni la terminación, por lo tanto, si ya las personas se encuentran purgando una pena es deber del Estado seguir salvaguardando sus derechos.

Uno de los derechos más vulnerados precisamente por esta condición es el derecho a la unidad familiar, máxime cuando en estos núcleos familiares existen menores de edad, cuando estos internos son trasladados a centros penitenciarios alejados de su familia, se configura la ruptura de la unidad familiar de los menores que en ella existan, o en otros casos cuando sus propios familiares deciden negar o esconder la verdadera situación jurídica de sus padres o de alguno de ellos a estos menores, por consideración a evitar un daño psicológico.

Al respecto La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades al desatar en los proceso de revisión, los fallos de tutela de primera y segunda instancia, atacando las decisiones del INPEC, contrarias a dicha norma, según el alto tribunal prima el interés superior del menor.

Así mismo ha manifestado que si bien es cierto el Código Penitenciario le da facultades exclusivas al INPEC para decidir sobre los traslados de los

internos y las internas, no es menos cierto que este vulnera con esos traslados el derecho a la unidad familiar de los menores a crecer y desarrollarse junto a su núcleo familiar y a no ser separado de este.

La línea jurisprudencial trazada desde los inicios de la Constitución Política hasta los momentos actuales, ha demostrado claramente que los derechos fundamentales de los niños y niñas colombianos a tener una familia y a no ser separados de ella, aunque los padres se encuentren privados de la libertad, son de interés superior del menor, toda vez que el ordenamiento jurídico configura toda normatividad para tal fin, como lo es el Código del Menor.

La “Línea Jurisprudencial” de esta investigación ha permitido visualizar el panorama jurisprudencial que rodea el interés superior del menor, en pro de sus derechos y los mecanismos que con el se configuran; mecanismos de apoyo brindado por otras jurisprudencias, como por ejemplo: La convención de los Derechos de los Niños

Finalmente se llega a la conclusión que se debe buscar la forma de examinar la Resolución 2176 del 10 de julio de 2000 y consecuentemente la Circular No. 16 de 1996, para establecer modificaciones y evitar que se sigan vulnerado los derechos fundamentales de los menores de edad, y de paso proteger la unidad familiar de los padres que se encuentran privados de la libertad, como reiteradamente se ha dicho.

BIBLIOGRAFÍA

Bernal C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson Educación

Colombia. Corte Constitucional. (2014). Sentencia T-002-2014 de 13 Enero de 2014. Bogotá.

Colombia. (1995). Sentencia T-408-1995, de 12 Septiembre de 1995. Bogotá. .

Colombia. Ministerio de Justicia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Bogotá: Diario Oficial 46.446 de 8 de noviembre de 2006.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0065_1993_pr001.html

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-566-07.htm>

López. D. (2006). El derecho de los jueces. Bogotá: Legis